

## Un caso de caducidad dentro del juicio partitorio

Hemos de recordar que hasta el 25 de febrero de 1937, fecha en que se expidió el Decreto Dictatorial N° 50, dando nuevas normas para la partición de las cosas comunes, los Partidores no tenían más que la calidad de peritos e intervenían en la distribución de bienes entre los condóminos, sin facultad para resolver cuestión alguna de derecho que se suscitaba entre ellos. Carecían propiamente de jurisdicción. Los jueces ordinarios eran los únicos llamados a decidir los puntos que obstaban el cumplimiento inmediato del cargo de Partidor.

Y como dado el sistema escrito de nuestra legislación procesal, siempre tardío y lento, las causas de partición demoraban indefinidamente, con ese ir y venir de los procesos ya al Partidor, ya al Juez Ordinario de origen, hubo de adoptar el legislador un nuevo sistema, concediendo jurisdicción a los Partidores para resolver las cuestiones que requieren resolución previa, sin que se acepten reclamos que obstan la partición, después de extinguido el término prudencial previsto en el Art. 82 de aquel Decreto N° 50, trasladado hoy al Art. 681 del Código de Procedimiento Civil.

Cuáles sean las ventajas del nuevo sistema no es, por ahora, motivo de nuestro comentario. Tendremos ocasión de hacerlo ojalá en breve.

Nos interesa solamente buscar acierto en la aplicación de las nuevas normas, concretando este somero estudio a un caso de caducidad del término concedido por la ley para el ejercicio del cargo de JUEZ PARTIDOR.

---

Para sentar la tesis que desarrollaremos se ha menester de la transcripción de las disposiciones legales que conceptuamos aplicables.

### Ley Orgánica del Poder Judicial

“Art. 12.—Los jueces son: ordinarios, especiales y árbitros.

“Son especiales los Jueces del Crimen, los de Policía, los que ejercen la jurisdicción coactiva, y todos los demás a quienes leyes especiales confieren esa calidad”.

### Código de Procedimiento Civil

“Art. 17.—Ejercen la jurisdicción legal tanto los jueces ordinarios como los especiales”.

“Art. 20.—Principia el ejercicio de la jurisdicción legal y de la convencional, desde que los jueces toman posesión de su empleo o cargo y entran al desempeño efectivo del mismo”.

“Art. 687.—El partidador practicará la partición dentro del término y en la forma que prescribe el Código Civil. Para este término, no se computará el tiempo entre la concesión de recursos *de los fallos del partidador* y la devolución de los autos por el superior”.

“Art. 692.—Todas las decisiones y resoluciones del partidador, se ejecutarán sin necesidad de intervención del juez que inició la causa. *Son hábiles para ésta todos los días y horas*”.

### Código Civil

“Art. 1.322.—La ley señala al partidador para efectuar la partición, el término de seis meses contados desde la aceptación de su cargo”.

---

### Tesis

Se trata de la división de una cosa común. De un fundo, concretamente.

El juez ordinario, en uso de las atribuciones concedidas en los Arts. 678 del Código de Procedimiento Civil y 1.315 del Código Civil, procedió al nombramiento de Juez Partidor, y luego sobrevino la *aceptación* de éste.

Inmediatamente después el Juez Partidor entró al conocimiento de la causa: expidió el primer decreto y nombró

Secretario para que actúe en la tramitación. Este decreto se notificó a las partes.

En tales circunstancias, uno de los interesados objetó la procedencia del nombramiento de Juez Partidor, fundándose en que había habido fallo ejecutoriado anterior, expedido de acuerdo con la Ley Especial de Hatos, según el cual debía procederse previamente al deslinde de los hatos por medio de árbitros, para llegar a la subdivisión, en cuyo caso se hallaba el fundo.

Entonces el Juez Partidor ordenó que pasen los autos a estudio del Juez Provincial de origen. Este resolvió que el mismo Juez Partidor debía resolver la incidencia, y la Corte Superior de Justicia confirmó la decisión en el mismo sentido.

Si se computara el tiempo decurrido desde que se envió el proceso al Juez Provincial hasta que volvió a conocimiento del Juez Partidor, el término de SEIS MESES a que se refiere el Art. 1.322 del Código Civil estaría extinguido, es decir, caducado para el ejercicio jurisdiccional. Si no se computara ese tiempo y, más bien, se lo dedujera, todavía estaría el Juez Partidor dentro del término en mención y, por tanto, con jurisdicción para el ejercicio del cargo.

Cuál de los dos extremos es procedente en estricto derecho?

---

### Nuestra opinión

No debemos perder de vista la delicadeza del asunto, por lo mismo que tiene relación con el ejercicio jurisdiccional. Los jueces, al administrar justicia, o al intervenir en actos de especial interés que deben estar protegidos por ellos, representan parte de la soberanía del Estado y ejercen una potestad pública de trascendental importancia en la vida social.

El problema se simplifica un tanto cuando hay jueces permanentes que gozan de sueldos fiscales, llámense jueces ordinarios o especiales. Para éstos, primero el nombramiento, luego la posesión y, por último, el desempeño efectivo del empleo, basta para que comience el ejercicio de la jurisdicción, siéndoles aplicable la prolongación de funciones (prorrogación, dice la ley), hasta que el sucesor les reemplace, al tenor del Art. 10 del Código de Procedimiento. Mientras que los Jueces Partidores, sin el sucesor de inmediato, no pueden ejercer jurisdicción una vez caducado el término de SEIS MESES señalado por la ley y computado estrictamente.

Nuestra opinión es en el sentido de que, para computar el término de seis meses, *debe incluirse* el tiempo que, en el caso propuesto, decurrió desde el envío del proceso al Juez Provincial hasta que fué devuelto al Juez Partidor con las ejecutorias respectivas. En consecuencia, que ha caducado el término dentro del cual pudo ejercer jurisdicción en la causa propuesta.

---

### Fundamos nuestra opinión:

I.—El Art. 1.322 del Código Civil, referido expresamente en el Art. 687 del Código de Procedimiento Civil, al emplear la frase “.....contados desde la *aceptación* de su cargo”, nos da la norma para fijar la fecha inicial del ejercicio de las funciones de Juez Partidor. El vocablo “*aceptación*”, que lo repite la reforma al Art. 679 del segundo de los antedichos Códigos, tiene un significado procesal que equivale a consentimiento de la persona nombrada para ejercer el cargo, manifestado .....en una acta compendiosa, que, como instrumento público que es, ha de contener, entre otros requisitos esenciales, la fecha de su otorgamiento. Esta fecha es, pues, la inicial, y salvo las excepciones de que luego trataremos, todos los días se computan, hábiles o inhábiles, por disponerlo así de modo especial el Art. 692 del C. de Procedimientos: “Son hábiles para ésta (causa de partición) todos los días y horas”.

La cita última excluye la necesidad de la deducción de días de vacancia judicial, como sucede con los demás términos. Desde el día siguiente al de la fecha de la *aceptación* se cuentan ininterrumpidamente los seis meses de término hasta la media noche del último día, siguiendo las reglas que contiene el Art. 43 del C. Civil.

II.—Ha desaparecido de nuestra legislación la antigua calidad de *términos comunes* y no queda, por tanto, al criterio judicial decretar la suspensión de los que actualmente se conceden, sino en los casos taxativamente determinados en la ley. Los *términos comunes* eran susceptibles de suspensión a juicio del juez de la causa y según el motivo en que se fundaba la alegación para conseguirla. A diferencia de los *perentorios* que no reconocían causas de suspensión, a no ser en el caso de exhibición pedida como prueba. (Arts. 363 y 925 del C. de E. Civil, de 1917).

Ahora los términos decurren sin interrupción, por regla

general.—Se suspenden, sin embargo, en los casos del Art. 330 del C. de Procedimiento.—Se suspende también el término que tiene el Partidor para desempeñar el cargo—caso muy especial—desde que se conceden *recursos de los fallos del Partidor*, hasta que vuelven los autos a su conocimiento, *enviados por el superior*.

Cuando se expidió el antes mencionado Decreto No 50, de 25 de febrero de 1937, sólo se dijo: Art. 88.—“El Partidor practicará la partición dentro del término y en la forma que prescribe el Código Civil”. — Más tarde, cuando se puso en vigencia el actual Código de Procedimiento Civil, en el Art. 687, se agregó el motivo especial de suspensión con esta frase: “Para este término no se computará el tiempo intermedio entre la concesión de *recursos de los fallos del partidor* y la devolución de los autos por el superior”.

Reconocidos los motivos que ocasionan la suspensión de los términos, de modo general.—Reconocido el motivo especial del Art. 687 del C. de Procedimiento, ninguno de ellos encuadra en el caso que estudiamos.—No los primeros, porque el despacho de la causa pudo hacerse sin obstáculo alguno insuperable, tanto que el mismo Partidor pudo retener el proceso y resolver la cuestión, sin esperar que la resolviera la justicia ordinaria.—No el segundo, porque ningún fallo ha expedido el Partidor del cual se hubiese recurrido.—Ha sido de la decisión del juez ordinario que se interpuso segunda instancia.

Podría acaso argumentarse que según el Art. 20 del C. de Procedimiento Civil no hubo desempeño efectivo del cargo, ya que el proceso no estaba en poder del Partidor durante todo el tiempo que duró la tramitación de la incidencia.—Pero refutamos: decayó el término desde la *aceptación del cargo* y la expedición del primer decreto.—De estos hechos, precisamente, emanó y comenzó el ejercicio jurisdiccional. Porque comenzó efectivamente el trámite del juicio partitorio se produjo la incidencia.....No cabe más efectividad en el desempeño.

La suspensión de términos no puede operarse a base de interpretaciones analógicas de la ley, sino a virtud de concreción de antecedentes que la producen. Y en el caso cuestionado, a todo trance, decayó el término de seis meses, a pesar de la incidencia suscitada, pues que no se ha presentado obstáculo alguno legal.—Y en tratándose de ejercer jurisdicción hemos de atenernos severamente a los términos de la ley, para no incurrir en la nulidad de las actuaciones o diligencias practicadas sin juez competente..... Si de la ley

procede la facultad de administrar justicia o de intervenir en actos para solemnizarlos, esa ley ha de respetarse, aplicando su claro tenor literal, para dar eficiencia a las resoluciones y vida a los actos jurídicos.

El pasaje legal no es de expresión incompleta, ni de construcción anfibológica.— Sólo cuando se conceden recursos de los fallos del Partidor se suspende el término que tienen estos jueces para el desempeño del cargo, dice con claridad el Art. 687 del C. de Procedimiento.— Luego, no cabe interpretación en contrario, sino usurpando atribuciones del Poder Legislativo.— “Si el sentido (se refiere a la ley) es perfectamente claro debe atenderse a éste antes que al pretenso pensamiento”, es regla de elemental conocimiento en la aplicación de las leyes.

III.—El contesto de la ley, el estudio de conjunto, ilustran más si cabe la cuestión.

Los jueces ordinarios, según los Arts. 678, 690 y 693 del Código de Procedimiento, intervienen en tres momentos procesales, a saber:

Para nombrar Juez Partidor,

Para ordenar el envío del proceso al superior, cuando el Juez Partidor ha concedido recursos, y

Para ordenar el archivo de la causa, cuando el Juez Partidor la ha enviado concluída.

He aquí los casos de intervención de los jueces ordinarios. Todo lo demás que dice referencia a los juicios partitorios compete al Juez Partidor.

Al determinar el motivo especial de suspensión del término que señala el Art. 1,322 del C. Civil, mal pudo el legislador hablar de concesión de recursos de los *fallos del juez ordinario*, puesto que, como antes lo expusimos, se ha previsto que el Partidor efectuará la partición, decidiendo todas las cuestiones conexas con ésta. Y así prescribió que para computar aquel término se deducirá sólo el tiempo intermedio entre la concesión de recursos “de los fallos del partidor y la devolución de los autos por el superior”.

No hay defectos ni faltas en la ley. Está demostrándolo su contexto al ilustrar su contenido en todas y cada una de sus partes.

Aunque el Partidor quedó sin el proceso, porque lo envió al Juez Provincial, la carencia de autos se debió a orden inconveniente y no interrumpió el término para el desempeño del cargo, desde que la ley quiso que sea sólo el mismo Partidor quien resuelva la causa partitoria.

En forma excepcional, de acuerdo con el Art. 21 de la

Ley de Arancel y Derechos Judiciales, pudiera también intervenir el juez ordinario para reducir el honorario fijado por el Partidor.

Si, faltando el acuerdo de los interesados, se fija el honorario en UN MIL SUCRES, por ejemplo, uno de ellos puede solicitar la reducción, si así cree conveniente. Entonces el juez ordinario hará el señalamiento definitivo.

En este caso, tampoco hay suspensión del término, porque no se trata de RECURSO, ni de resolución del Partidor.